JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D. C., noviembre once (11) de dos mil veintiuno (2021).-

Sentencia – Segunda Instancia dentro de la **Acción de Tutela** promovida por **Juan David Quitian Duque** en contra de **Banco Davivienda, HelmBank, Scotiabank y, Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá.**

Radicado 1100140 03 039 2021 00667 03.

Secuencia: 25502 del 13/10/2021, **sin hora.**

Será proferida la decisión de segunda instancia, dada la impugnación formulada por el extremo accionante contra el fallo de tutela proferido por el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, calendado del 27 de agosto de 2021, mediante el cual denegó el amparo del derecho de hábeas data, concedió el amparo del derecho de petición y, requirió a la autoridad judicial vinculada para atender directrices del orden legal.

ANTECEDENTES

El señor JUAN DAVID QUITIAN DUQUE promovió acción de tutela contra las entidades financieras de la referencia al considerar vulnerado su derecho al debido proceso y hábeas data; motivo por el que, en sede de tutela, solicitó que el Juez Constitucional le ordene al extremo accionado que:

- 1)** Eliminen los reportes negativos realizados en calidad de fuente de información, por cuanto dichas entidades deben dar cumplimiento al artículo 573 del Código General del Proceso para la permanencia de dicho reporte.
- 2)** Eliminen los reportes negativos realizados en calidad de fuente de la información, por inexistencia de la autorización previa de que trata el artículo 8, numeral 6, de la Ley 1266 de 2008 y por falta de acreditación de la titularidad de la obligación.
- 3)** Informen a Datacrédito, Procrédito y Transunión que eliminen el histórico de mora que presentan las obligaciones que originaron los reportes negativos hechos ilegalmente.
- 4)** Aporten constancia del cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en su calidad de fuentes de la información reportadas a las centrales de riesgo y, pruebas de la titularidad de la obligación.

Como fundamento de sus pretensiones, el accionante relató que se encuentra en proceso de Negociación de Deuda ante el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá; sin embargo, no se han materializado las reglas establecidas en el artículo 573 del Código General del Proceso, lo cual le genera, en calidad de perjuicio, un factor de interrupción para postularse como consumidor de productos financieros¹.

Puntualizó que su derecho al debido proceso y hábeas data financiero fueron vulnerados cuando se realizó el reporte, porque antes de divulgar cualquier dato negativo sobre el aparente mal comportamiento crediticio, las entidades accionadas estaban obligadas a dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

¹ Ver el documento 02 Demanda.

Aseveró que su derecho de petición fue vulnerado por HELM BANK y SCOTIABANK, quienes no respondieron los requerimientos que les formuló y, que DAVIVIENDA resolvió de forma parcial.

EL FALLO IMPUGNADO

En esta nueva oportunidad- luego de haberse decretado la nulidad de lo actuado en antecedente, por ausencia de vinculación del Juzgado que conoce del trámite de Negociación de Deudas, como se indicó en auto de trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL resolvió el amparo a favor del accionante, únicamente, frente a su derecho de petición que fue vulnerado por el BANCO ITAÚ y, respecto de las actuaciones adelantadas por el JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL, a quien le ordenó gestionar las directrices establecidas en el artículo 573 del CGP. Por demás, desvinculó a CIFIN, DATACRÉDITO y a la SIC por considerar que no han transgredido derechos del actor.

IMPUGNACIÓN

El accionante alegó que el objeto de esta acción no es definir si él como accionante debe o no la deuda, si firmó o no autorización para reportarlo, por el contrario, lo que corresponde es determinar si DAVIVIENDA, ITAÚ y SCOTIABANK vulneraron sus derechos fundamentales al incumplir con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

Agregó que en la decisión impugnada no se tuvo en cuenta que la eliminación del reporte negativo se solicita con fundamento en una norma prevalente que no establece exigencias para su ejecución; que no tiene ningún asidero la decisión judicial, la cual se basó únicamente en que las deudas están insolutas; que si el legislador quisiera que un deudor insolvente fuera retirado de las centrales de riesgo pagando las deudas, no habría sido específico al establecer que dicho pago liberador se hace con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial.

CONSIDERACIONES

Esta segunda instancia denegará los argumentos de impugnación formulados por el actor constitucional, contra la sentencia dictada por el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL, dado que, se encuentra incumplido, por lo menos, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela.

Para llegar a tal conclusión, se memora que, tanto el accionante, como la autoridad judicial vinculada a esta causa coincidieron en que la génesis de los hechos considerados vulneradores data del año 2014, momento en que la jurisdicción dictó auto de apertura del trámite de liquidación², sin que frente a tal hecho se hubiere presentado recurso alguno o se hubiesen utilizado las herramientas procesales para adicionar providencias judiciales, y, menos que

² Documento 36 Respuesta Juzgado 48 Civil Municipal, dentro del cuaderno 01 Primera Instancia.

ante tal omisión hubiere negativa judicial, que en tiempo razonable le hubiere convocado al ejercicio de esta acción constitucional, por lo que, siendo ello así, partiendo de los alegatos del actor, quien refiere que el extremo convocado desatendió las exigencias del artículo 573 del Código General del Proceso (vigente desde el 1 de octubre de 2012) y, artículos 8, 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008³, la inmediatez y subsidiariedad, de la acción constitucional presente no se cumplen.

Es más, el promotor de esta acción reclama acerca del término de cuatro años de la permanencia de la información, que se contabilizan a partir de la fecha en que son pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida; pero, según informe allegado por el JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL, la audiencia de adjudicación se llevó a cabo en abril de 2019; hecho que, a consideración de esta instancia ya se encuentra dirimido con la orden que se le impartió a aquella autoridad judicial en el fallo de tutela impugnado, puesto que, se le requirió a fin de proceder en la forma y términos descritos en el artículo 573 CGP.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Primero: **CONFIRMAR** el fallo de tutela calendado del 27 de agosto de 2021, proferido por el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ dentro de la acción de tutela promovida por el señor JUAN DAVID QUITIAN DUQUE contra BANCO DAVIVIENDA, HELMBANK, SCOTIABANK y el vinculado JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.

Segundo: **REMÍTASE** en oportunidad el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Ofíciase como corresponda.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE

JUEZ

jffb

Firmado Por:

Luisa Myriam Lizarazo

Ricaurte

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 009

³ Página 6 del documento 02 Demanda.

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1237f16d6730feb5ac1cc504d5e24c8f795f683b6ed8df683ac75fdf83acd3de**

Documento generado en 12/11/2021 08:39:44 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>